



“PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE FORTALEZCAN LA ATENCIÓN, EL ACCESO Y PERMANENCIA EDUCATIVA DE LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES” _ VIGENCIA 2021

La Dirección de Cobertura y Equidad, tiene como misión garantizar la formulación, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos que fortalezcan la atención, el acceso y permanencia educativa de los diferentes grupos poblacionales en las Entidades Territoriales.

A continuación se presentan los principales avances en atención en materia educativa para las poblaciones étnicas, migrantes y vulnerables:

Inclusión Educativa de población migrante

En Colombia la educación es un derecho fundamental y un servicio público consagrado en la Constitución Política que se ofrece los niveles de preescolar, básica y media a la población que se encuentra en el territorio nacional, incluyendo la población migrante. La mayoría de las personas migrantes y refugiadas en Colombia provienen de Venezuela, situación que ha implicado el diseño e implementación de diversas estrategias de acceso, acogida, permanencia y calidad para que los niños, niñas y adolescentes provenientes de ese país gocen de la garantía al derecho a la educación sin discriminación.

Colombia es uno de los países del mundo que recibe más personas en condición de movilidad humana, así lo demuestran los 1,7 millones de migrantes y refugiados provenientes de Venezuela que hacen parte de los 5,9 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo (UNHCR, 2020a). De acuerdo a los datos proporcionados por Migración Colombia (2020a), 58% de estas personas migrantes son hombres y mujeres entre los 18 y los 39 años de edad; el 28% son niños, niñas y adolescentes.

Actualmente se adelanta la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), que contempla la creación del registro único, piedra angular para el nuevo proceso de regularización de la situación migratoria con alcances hasta el año 2031. El Estatuto representa una oportunidad para más de 341 mil estudiantes migrantes de origen venezolano matriculados en Colombia que carecen de un documento de identificación válido en territorio nacional. Además, recoge parte de las propuestas planteadas en las iniciativas de regularización que se impulsaron desde



el Ministerio de Educación Nacional a través del impulso a la creación del Permiso Especial de Permanencia Educativo PEP entre los años 2019 y 2020 con el apoyo de la Cancillería y Migración Colombia.

Se han liderado procesos técnicos, normativos y políticos que han permitido incluir en el sistema durante 2021 a más de 489 mil estudiantes migrantes de origen venezolano en todos los niveles educativos, como parte de su compromiso solidario, pero también dando cumplimiento al derecho internacional en cuanto a la garantía de los derechos humanos de toda la población. En coordinación con las secretarías de educación se ha actualizado y adaptado el marco normativo a través de decretos, resoluciones y circulares con los siguientes objetivos:

- Flexibilizar los requisitos de documentación para ingresar al sistema educativo.
- Facilitar el registro de los estudiantes en el sistema de información de matrícula oficial con variables que permiten una completa caracterización.
- Habilitar a todas las instituciones educativas del país para validar los grados cursados en Venezuela mediante evaluaciones y procesos de convalidación cuando no se tengan los documentos debidamente legalizados y apostillados.
- Propender por el acceso a estrategias como la alimentación y el transporte escolar en igualdad de condiciones a los estudiantes colombianos.
- Gestionar e impulsar los procesos de regularización migratoria para estudiantes indocumentados e irregulares.

Al cierre de la vigencia 2021 (noviembre), se reportó la matrícula de origen venezolano en 1.083 de las 1.120 entidades administrativas locales del país (municipios y áreas no municipalizadas) que reportan matrícula en el SIMAT; es decir, cerca del 97% del territorio nacional, con mucha más incidencia en las zonas urbanas (79%) que en las zonas rurales (21%). En términos de acceso por género, la matrícula es bastante igualitaria, con un 50,2% de matriculados del género femenino, frente a un 49,8% de género masculino. Se destaca que la región del país que más población migrante de origen venezolano atiende en el sistema educativo es la región Centro Oriente, la cual está conformada por los departamentos de Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca y el Distrito Capital – Bogotá; esta región acoge la matrícula de 167 mil estudiantes, seguido muy de cerca por la región Caribe con 164 mil estudiantes distribuidos en los ocho departamentos que la conforman. El mayor volumen de la matrícula por nivel educativo está en primaria con el 55%, seguido de secundaria con 24%, transición con 14%, los grados de media (décimo y once) con el 6%; prejardín y jardín con el 1%.

Imagen 1. Evolución de la matrícula de migrantes venezolanos



Fuente: MEN, 2021.

El acceso y acogida al sistema educativo de los niños, adolescentes y jóvenes provenientes de Venezuela, se gestiona por medio del análisis de información, permanentes cruces de grandes bases de datos y registros administrativos, la creación de una variable especializada para identificar la población migrante y la gestión de la información desde el territorio para el cargue en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT). En coordinación con el territorio se realizan búsquedas activas que permiten identificar, caracterizar y gestionar la cobertura.

Actualmente, cerca de trescientos cuarenta y un mil (341) estudiantes migrantes de origen venezolano no tienen un documento de identificación válido en Colombia (69,8% de matriculados). En este contexto, al no haber barrera de ingreso al sistema, los niños, niñas y adolescentes venezolanos, sin importar su estatus migratorio, pueden acceder al sistema educativo y cursar sus estudios en el país. Para ello, el MEN y la Autoridad Migratoria por medio de la Circular Conjunta No. 016 de abril de 2018 (MEN-Migración Colombia), y de mecanismos para lograr la homologación y validación de grados (Decreto 1288 de 2018), está superando las barreras que aún existen frente al tránsito por el sistema educativo.



Por medio de la Circular Conjunta 16 de 2018 del Ministerio con Migración Colombia, se establece la hoja de ruta que permite procesos de atención a estudiantes procedentes de Venezuela en los establecimientos educativos de Colombia de manera general. En el contexto de pandemia se sostuvo el flujo regular de la matrícula de los estudiantes migrantes de origen venezolano; se fortaleció la entrega de materiales pedagógicos para la continuidad del aprendizaje en casa de los estudiantes pendulares, que supuso la activación del corredor humanitario para enviar guías, elementos de protección personal y raciones de alimento a los estudiantes matriculados en instituciones educativas colombianas que residen del lado venezolano de la frontera. También, se fortalecieron estrategias pedagógicas flexibles a través de la implementación del modelo Círculos de Aprendizaje, estableciendo procesos de refuerzo escolar y acompañamiento a través de herramientas como radio, teléfono o dispositivos digitales, interacciones virtuales y guías físicas de acuerdo con las capacidades de las familias, lo que contribuyó a mitigar el rezago escolar durante el periodo de educación remota para los estudiantes.

Para proteger las trayectorias educativas de los estudiantes migrantes, se propende por un acceso igualitario al Programa de Alimentación Escolar (PAE), en tal sentido que el único requisito para ser beneficiario de esta estrategia se refiere a que la institución educativa y el grado en el que están inscritos esté focalizado por la secretaría de educación. En 2018, se benefició al 52% de los estudiantes migrantes de origen venezolano con esta estrategia, lo que significó atenciones a 18 mil de los 34 mil estudiantes matriculados en el sistema educativo. Para 2021, esta cifra correspondió al 73.6%, un incremento importante que se traduce en 344 mil estudiantes de origen venezolano matriculados en instituciones educativas de carácter oficial y educación contratada que son cobijados con la estrategia.

El sector educativo se ha preocupado por garantizar el acceso a la estrategia de transporte para la población en situación de migración pendular en la zona de frontera; para ello diseñó el Corredor Humanitario Escolar, el cual beneficia anualmente a cerca de 4.000 estudiantes que viven en los municipios fronterizos de Venezuela y asisten día a día a las instituciones educativas de Cúcuta, Villa del Rosario y otros municipios fronterizos en el departamento de Norte de Santander. El Ministerio de Educación Nacional ha liderado los procesos normativos, técnicos, políticos y financieros necesarios para la efectiva operación del corredor humanitario. Muestra de ello son las autorizaciones para compromiso de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) que la Oficina de Planeación y Finanzas del MEN ha realizado, a partir de las cuales se han invertido en el corredor humanitario escolar una suma que supera los \$22.000 millones de pesos entre las vigencias 2015-2021.



En este mismo sentido y en consideración a que los sistemas educativos de Colombia y Venezuela son distintos, las medidas tomadas a partir de los planteamientos de la Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela establecida en el CONPES 3950, ha permitido avanzar en varios frentes, como el diseño de pruebas de suficiencia y de procesos de nivelación. Con la expedición del Decreto 1288 de 2018 se ha avanzado en las estrategias de acreditación de grados académicos. Este Decreto estableció que los niños provenientes de Venezuela podrán validar los grados mediante evaluaciones o actividades académicas en los establecimientos educativos en lo que han sido ubicados, sin costo alguno.

Las acciones de nivelación que se han implementado han permitido el avance académico de niños, niñas y adolescentes que estaban fuera del sistema escolar o que habían tenido procesos escolares interrumpidos, lo que les permitió retomar su motivación hacia la vida escolar e ingresar nuevamente al sistema. Estas acciones han implicado igualmente mejora de los medios físicos y de la infraestructura disponible, y el trabajo con maestros y administradores para asegurar que tengan la capacidad de crear un ambiente inclusivo y acogedor (ECW, 2020).

Con el objetivo de prevenir la xenofobia, se han diseñado secuencias didácticas con material lúdico que hacen parte de los protocolos y estrategias que se han dirigido a los comités territoriales de convivencia escolar y puesto a disposición de los directivos, docentes y estudiantes. En el año 2020 el MEN, en el marco del proceso de fortalecimiento de capacidades de las secretarías de educación, prestó asistencia técnica al 100% de los comités territoriales de convivencia escolar para que incluyeran en sus planes la prevención de todas las violencias y las discriminaciones. Adicionalmente, de manera específica en la zona de frontera con Venezuela, desde el mes de abril de 2021 se inició el acompañamiento a los comités de convivencia de los municipios de Villa del Rosario, Cúcuta y Ocaña y del departamento de Norte de Santander para revisar sus planes de convivencia escolar y orientar acciones de prevención de violencia en contra de niños venezolanos o colombianos retornados.

El esfuerzo del sector educativo y del Gobierno ha sido complementado con el apoyo de la comunidad internacional, quienes han brindado recursos, asistencia técnica y movilización de diversas organizaciones para atender el fenómeno migratorio. Diferentes organizaciones internacionales han respondido en el diseño, gestión y evaluación de diferentes estrategias para responder efectivamente a este nuevo reto en materia de educación.



De manera conjunta, se han definido las prioridades para el acceso al sistema educativo, que favorecen y promueven acciones orientadas a: i) Aumentar el acceso a la educación y la permanencia; ii) Mejorar la calidad de la educación y del aprendizaje; iii) Promover el bienestar socioemocional y salud mental; iv) Fortalecer el sector educativo en la generación y mejora de sus capacidades.

Dentro de las gestiones de cooperación que se han gestado para el apoyo en temas educativos relacionados con el acceso, bienestar y permanencia de la población migrante de origen venezolano se destacan las siguientes:

- Cooperación con USAID para el desarrollo del RERA (Rapid Education Risk Assessment) // (Evaluación Rápida de Riesgos Educativos), que permitió analizar las capacidades del sector educación realizados por otras organizaciones. Adicionalmente con USAID se estructuró el programa de Co-creación: “Juntos Aprendemos” con el cual se busca brindar educación de calidad en las comunidades receptoras de migrantes en Colombia con una inversión de 35 millones de dólares.
- EDUCACIÓN CANNOT WAIT (ECW): Con el programa FER – First Emergency Response, el cual tiene por objetivo mejorar el acceso a una educación de calidad para niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados venezolanos, colombianos retornados y de las comunidades de acogida que se encuentran por fuera de la escuela, con una inversión de 3,6 millones de dólares cuya implementación fue liderada por Save The Children. Así mismo, se presentó el proyecto MYRP – Multi Year Resilience Programme, cuyo objetivo es identificar las mayores brechas en acceso, bienestar y permanencia con una financiación de 12 millones de dólares en un escenario de implementación de 3 años a partir de 2021.
- PROGAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA / WFP): El objetivo de este proceso de articulación y cooperación es aumentar la cobertura de la estrategia de permanencia que representa el Programa de Alimentación Escolar (PAE), a través de la ampliación de cobertura, dentro del alcance de la cooperación gestada con el PMA para 2021 se ha contribuido mes a mes en aportar en promedio 30.687 raciones distribuidas en Arauca, Barranquilla, La Guajira, Cúcuta, Santa Marta y Valledupar.



Población víctima del conflicto armado interno

El Ministerio hace parte activa del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral para las Víctimas –SNARIV–, a través del cual participa de forma activa con el propósito de articular acciones interinstitucionales en favor de las víctimas en los Subcomités Técnicos del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas. Y busca garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de la población víctima del conflicto como parte de su reparación integral por su afectación en el marco del conflicto armado interno.

Durante lo corrido de la vigencia 2021, a través del Sistema Integrado de Matrícula-SIMAT- se identificó la vinculación y atención en el sistema educativo de 1.638.821 niños, niñas, jóvenes y adolescentes víctima del conflicto interno lo que equivale al 84,2% y 1.623.292 en situación de desplazamiento equivalente al 84,42% en el rango de 5 a 17 años. El sistema adicionalmente realiza la caracterización de la asistencia y atención de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas del conflicto interno y como hecho de afectación el desplazamiento forzado.

De acuerdo con el registro del Sistema de Información la población en situación de desplazamiento representa el 17,73% de la matrícula general, en relación con la cobertura y la atención educativa por niveles, la vinculación se concentra de la siguiente manera: un 45,83% en primaria, 37,98% secundaria, 9,27% en media, un 2,04% de la población que participa en programas de Ciclos en extraedad. La matrícula de la población víctima del conflicto interno y en situación de desplazamiento a comparación de la matrícula nacional la población víctima y en situación de desplazamiento accede en mayor porcentaje a secundaria y ciclos del 2 al 6.

Respecto a la matrícula de población en situación de desplazamiento los departamentos receptores con población identificada como víctima del conflicto armado y en situación de desplazamiento frente a su matrícula general se encuentra Chocó con un 49,5%, para el caso de Caquetá, Putumayo, Guaviare, Arauca, Nariño, Sucre, Cesar, Antioquia, Meta y Cauca sus porcentajes son superiores al 25%. En cuanto a la ubicación de la población se tiene que el 50% se encuentran concentrados en 7 departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Nariño, Cesar, Córdoba y Magdalena.

En cuanto a la trayectoria educativa de la población víctima, en 2021 entre los grados de transición a once se contaban 1.594.531 matriculados, al verificar su estado para el siguiente año, (febrero de 2022), el 79,2% está en su trayectoria esperada (se



matricularon al año siguiente del que estaban en 2021), el 11,2% repiten el año, el 1% continuó en el ciclo de adultos y se espera que el 7,8% se matricule en el transcurso de 2022.

Con el objetivo de seguir avanzando en acceso, bienestar y permanencia de la población víctima, el Ministerio incluyó en su planeación de inversión 2021, la alianza con socios estratégicos para adelantar un proceso de fortalecimiento de la trayectoria educativa de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado ubicados en zonas afectadas por acciones bélicas. A partir del fortalecimiento de las capacidades institucionales de las Secretarías de Educación y los Establecimientos Educativos para identificar, acompañar, y hacer seguimiento a niños, niñas, jóvenes y adolescentes en situación de desplazamiento y víctimas matriculados en los establecimientos educativos.

Con el Consejo Noruego de Refugiados NRC se desarrolló el Fortalecimiento a las capacidades técnicas y pedagógicas de las entidades territoriales certificadas en educación e instituciones educativas focalizadas para el acceso y permanencia educativa de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto. Bajo esta perspectiva se fortaleció la Ruta de acceso, bienestar y permanencia educativa de la población víctima, articulada a los compromisos establecidos por el sector en el marco de los Comités de Justicia Transicional Territoriales; para fortalecer la gestión con procesos que garanticen el acceso, la acogida, el bienestar y la permanencia de esta población en el sistema educativo, como:

- Atención a la ruta de permanencia para población víctima en nueve secretarías de educación certificadas: Chocó, Buenaventura, Cauca, Nariño, Tumaco, Meta, Caquetá, Florencia, Putumayo.
- Búsqueda activa focalizada identificación y vinculación al sistema educativo de niños, niñas y adolescentes víctimas, que se encuentran fuera del sistema escolar.
- Fortalecimiento técnico a 36 instituciones educativas focalizadas.
- Construcción de 9 Rutas de acceso, bienestar y permanencia de la población víctima.
- Vinculación al sistema educativo de 1.256 niños víctimas identificados fuera del sistema mediante la aplicación de censo de escolaridad.
- Acompañamiento y seguimiento de trayectorias educativas en su re- vinculación al sistema educativo.
- Dotación de 1.256 kits escolares para la permanencia.



- Implementación de la metodología El Combo de Paz, estrategia pedagógica que aborda el tema de recuperación de la memoria histórica, convivencia, paz, prevención y gestión de riesgos de reclutamiento entre otros aspectos de contexto presentes en zonas afectadas por el conflicto armado interno.
- Dotación de 39 Cajas de Herramientas para la implementación de la Metodología “El Combo de Paz”.
- Formación a 121 docente en la implementación de la ruta de permanencia.
- Desarrollo de 121 Talleres con padres de familia en prevención de deserción escolar.

El Ministerio como parte de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados – CIPRUNNA –.

En el marco de la CIPRUNNA, el Ministerio participó en los pilotajes de armonización de rutas de prevención de reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes, convocadas por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, UNICEF y USAID, actividades previstas con las autoridades locales y entidades del nivel nacional y secretarías departamentales de educación, desarrolladas en Tumaco, Cauca, Norte de Santander y Cúcuta. En estas jornadas se realizó la identificación de riesgos y problemáticas específicas, además de la oferta y acciones municipales para la mitigación del riesgo buscando fortalecer las capacidades de respuesta oportuna de los municipios y departamentos.

Esta Cartera Ministerial participó de la estrategia nacional denominada “Súmate por mí”, la cual fue desarrollada hasta octubre de 2021, con el objetivo de fortalecer las capacidades individuales, familiares, comunitarias e institucionales para contribuir a la efectiva prevención del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados y grupos delictivos organizados en los municipios priorizados, la cual fue ejecutada conjuntamente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, la Agencia para la Reincorporación y Normalización, y el Ministerio de Educación Nacional con la asistencia técnica de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF- y la Organización Internacional para las Migraciones -OIM, ante el Fondo Multidonante de Naciones Unidas.

El proyecto fue implementado en 86 municipios de 17 departamentos, los cuales corresponden a territorios PDET y se encuentran en riesgo medio y alto de acuerdo con el índice de riesgo de reclutamiento del Observatorio de la Secretaría Técnica de



la CIPRUNNA (Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes). Municipios que se encuentran en 18 Entidades Territoriales a saber: Antioquia, Apartadó, Turbo, Arauca, Bolívar, Cauca, Caquetá, Córdoba, Chocó, Meta, Nariño, Tumaco, Norte de Santander, Sucre, Tolima, Buenaventura, Putumayo y Guaviare.

Población vinculada al sistema de responsabilidad penal para adolescentes - SRPA

El Ministerio es un actor fundamental del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA, el cual tiene la misión de apoyar a las ETC para que garanticen el derecho a la educación de los jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley penal, los cuales también son considerados como una población de especial protección constitucional, a partir de la organización de la prestación del servicio educativo en los términos contemplados en el Decreto 2383 de 2015, promoviendo la estructuración de las acciones educativas específicas que fomentan el acceso, la permanencia y la promoción escolar, así como la pertinencia de la oferta.

En 2021 se encontraban matriculados 17.167 estudiantes vinculados al SRPA, la mayor concentración se encuentra en el ciclo de adultos (33,6%), le siguen secundaria (30,7%); y primaria con el 21%. Al hacer la comparación con los matriculados a febrero de 2022 se observa que de 10.931 matriculados entre transición y grado once, el 64,9% de los estudiantes en SRPA se encuentran en su trayectoria esperada, el 12,4% están repitiendo el año, el 1,9% se pasó a ciclo de adultos y un 18,1% están por matricularse en el transcurso del año.

Durante el 2021 el divulgó y socializó el Decreto 2383 de 2015, en tal sentido se trabajó con equipos técnicos de las secretarías de educación para la formulación de acciones encaminadas a la garantía del derecho a la educación de los jóvenes en conflicto con la ley penal.

Se logró realizar procesos de formación a docentes, directivos docentes y funcionarios de Secretarías de Educación focalizadas para la atención pertinente a la población vinculada al sistema, sobre los Lineamientos para la prestación del servicio educativo en el marco del SRPA a través de un Diplomado Virtual en la plataforma "Colombia Aprende".

Regionalmente los procesos de articulación interinstitucional entre el ICBF, los operadores de los Centros, las Secretarías de Educación y las Instituciones Educativas, actualmente presentan en términos generales la construcción y avance en la ruta para mejorar el acceso de la población a la oferta formativa de los jóvenes. El reconocimiento



y visibilización de las particularidades y necesidades educativas de la población juvenil vinculados al SRPA tanto en medidas privativas y no privativas de la libertad, ha permitido que las instituciones educativas en coordinación con los centros adapten sus currículos y garanticen una oferta pertinente y coherente con el avance particular de cada uno de los estudiantes.

Se ha logrado que los reportes de la población vinculada al SRPA de las regionales del ICBF a la nación, sean más oportunos y depurados, dando cuenta de un avance en la caracterización de la población, que ha permitido mejorar los cruces de información con el Sistema Integrado de Matricula -SIMAT, permitiéndose de esta manera una mejora en la confiabilidad de los datos para la asignación y seguimiento de recursos del Sistema General de Participaciones a las Secretarías de Educación.

Infraestructura Educativa Étnica 2021

El Ministerio de Educación Nacional, concertó con las comunidades negras, afro, raizales y palenqueras NARP y con los pueblos indígenas 5 indicadores que responden a los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, para el sector educación correspondientes a la Subdirección de Acceso.

Para lograr el cumplimiento de estos compromisos el Ministerio de Educación Nacional ha focalizado recursos de la siguiente manera por vigencia incluida la gestión al cierre del año 2021, así:

Grupo	Presupuesto Priorizado por vigencia		
	2019	2020	2021
Indígenas	\$22.234.986.601	\$200.371.252	\$13.837.525.515
NARP	\$7.881.139.384	\$5.000.000.000	\$3.000.000.000

Basado en lo anterior durante la vigencia 2021, se avanzó de la siguiente manera correspondiente a los indicadores concertados en el Plan Nacional de Desarrollo:

▪ Pueblos Indígenas:

1. Porcentaje de implementación de la línea de financiación de proyectos de infraestructura: Avance del 23% en la ejecución de los recursos del 2021.
2. Sedes dotadas con mobiliario y elementos didácticos: Se dotaron 170 sedes educativas con población mayoritariamente indígenas beneficiando a más de 6.269 estudiantes en 52 municipios y 19 departamentos.



3. Diseño de línea de financiación de proyectos de Infraestructura establecida con monto de recursos asignados para el cuatrienio, para población Indígena concertada: Mediante la formulación de la Convocatoria de Infraestructura Educativa Rural realizada en el año 2019 con objeto se especializó una línea de postulación correspondiente a comunidades indígenas que dejó como resultado la priorización de 70 sedes educativas para ejecución de obra las cuales se ejecutaron en un 100%.
4. Gestión de Recursos: En la vigencia 2021, se formuló articuladamente con Departamento Nacional de Planeación el CONPES 4056 con el objetivo de incrementar y mejorar en un horizonte temporal de 3 años la capacidad de la infraestructura educativa y espacios de aprendizaje para la prestación adecuada del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, con énfasis en las comunidades rurales y los grupos étnicos a lo largo del territorio nacional. Esto a través de la declaración de importancia estratégica del proyecto “Construcción, mejoramiento y dotación de espacios de aprendizaje para prestación del servicio educativo e implementación de estrategias de calidad y cobertura nacional”.

Dentro del componente indígena se incorporaron recursos por cerca de \$38 mil millones de pesos con la organización Consejo Regional del Cauca-CRIC, de los cuales \$3.000 millones se ejecutarán en dotaciones durante la vigencia 2022 y \$35.000 millones en obras de infraestructura para las vigencias 2023 y 2024.

Adicionalmente se proyectaron montos de inversión dentro del CONPES 4056 por cerca de \$21.000 millones para avanzar en la atención en comunidades indígenas y NARP, de igual forma se proyectaron recursos de inversión para ejecutar dentro del presupuesto 2022 por \$6.000 millones con la Comisión Nacional de Trabajo de la Educación para Pueblos Indígenas CONTCEPI para ejecución de obras de mejoramiento por \$3.000 millones y dotaciones de mobiliario escolar por otros \$3.000 mil millones adicionales.

▪ **Comunidades Negras, Afro, Raizales y Palenqueras:**

1. Porcentaje de colegios diseñados y construidos en municipios con comunidades mayoritariamente negra, afrocolombiana, raizal y palenquera: La Convocatoria de Infraestructura Educativa Rural 2019 generó una línea especializada para comunidades negras, afros, raizales y palenqueros con la ejecución y entrega de 80 obras. Se intervinieron con obras de infraestructura



educativa 53 sedes educativas con población mayoritariamente NARP beneficiando a más de 18 mil estudiantes en 27 municipios y 9 departamentos del país.

2. Porcentaje Instituciones educativas con dotación de elementos didácticos, mobiliarios y demás herramientas que faciliten el ejercicio de la etnoeducación: Se dotaron 58 sedes educativas con población mayoritariamente NARP beneficiando a más de 8 mil estudiantes en 15 municipios y 8 departamentos.